

De alternativa política al asedio como política: escenarios para el movimiento social en el Ecuador

From political alternative to siege as politics: scenarios for the social movement in Ecuador

Resumen: El desarrollo del gobierno de Rafael Correa en el Ecuador (2007-2017) ha sido un proceso vertiginoso y “exitoso”. Sin embargo, las organizaciones y movimientos sociales, que durante la década de los 90 se habían convertido en los actores políticos más importantes en la confrontación al neoliberalismo, no lograron el mismo éxito. El presente trabajo realiza un balance sobre de la relación de los movimientos sociales con el gobierno de Rafael Correa.

Palabras claves: Gobiernos progresistas, Movimientos sociales, Movimiento indígena, modernización conservadora

Abstract: The development of the government of Rafael Correa in Ecuador (2007-2017) has been a vertiginous and “successful” process. However, social organizations and movements during the 1990s had become the most important and central political actors in the confrontation with neoliberalism, did not achieve the same success. This paper analyzes the relationship between social movements and the government of Rafael Correa.

Keywords: Progressive governments, Social movements, Indigenous movement, conservative modernization

Fecha de recepción: 10 de agosto de 2017

Fecha de aceptación: 30 de septiembre de 2017

De alternativa política al asedio como política: escenarios para el movimiento social en el Ecuador

Stalin Gonzalo Herrera Revelo*

Introducción

Pasadas las elecciones de abril de 2017, luego de diez años de “Revolución ciudadana”, el proceso político del Ecuador parece renovarse. Lenin Moreno el nuevo presidente ha llamado al diálogo, tiene un estilo distinto de organizar la política y se distancia del “estilo” combativo de Rafael Correa. Sin embargo, el escenario para los movimientos sociales está más allá de los estilos de la política presidencial.

El desarrollo político del período de Rafael Correa se caracterizó por visibles contradicciones y paradojas: por un lado, una tensión creciente con los movimientos sociales, por el otro el incremento de tensiones con la derecha. A diferencia de los años noventa en el cual las organizaciones se articularon en resistencia al neoliberalismo (1980-2006), las protestas actuales se producen como reacción a un gobierno que discursivamente se define de izquierda, levanta un “programa” de política social en sintonía con las demandas de las organizaciones y, a su vez, un programa económico en sintonía con intereses del capitalismo.

En este final del período el mismo campo popular organizado muestra sus propias contradicciones. Si en los noventa se enfrentaron a la derecha neoliberal, en las elecciones del 2017 algunas organizaciones y dirigentes decidieron apoyar la candidatura del representante de la derecha financiera, en un contexto en el cual las elites, a pesar de que han sido los mayores y más importantes ganadores del proceso, se re-articulan en la disputa por el Estado logrando mejorar su posición en la Asamblea Nacional.

Para el gobierno, aunque su popularidad ha tenido altos y bajos¹, su desarrollo político fue sido exitoso. No solamente porque ha logrado mantener su popularidad alta, ganar siete procesos electorales y revertir algunas tendencias del neoliberalismo, sino que, a lo largo de diez años logró mantener y expandir su “hegemonía” frente a las estructuras políticas neoliberales y frente a los sectores sociales movilizados. Una disputa ideológica y política que contuvo las acciones de oposición de izquierda y derecha, transformando el escenario político y las condiciones de la movilización de las organizaciones y movimientos sociales.

El objetivo de este trabajo es exponer algunas ideas que permitan complejizar los cambios de contexto y los desafíos que enfrentan las organizaciones sociales en Ecuador. Para esto intentaré: 1) bosquejar el escenario de crisis previa al gobierno de Rafael Correa y el rol de las organizaciones sociales en el proceso, 2) mostrar la dinámica del construcción hegemónica, y 3) los giros de hegemonía entendidos como el cambio de contexto que se abre para los movimientos sociales.

* Investigador Asociado al Instituto de Estudios Ecuatorianos (Ecuador). Email: elenauta7@gmail.com

¹ Véase: “Para mandatario Rafael Correa baja en encuestas fue por temor”, *El Universo*, 26 de julio 2015, en <http://tinyurl.com/p79hr48>.

Neoliberalismo y movimiento

El gobierno de Correa no se puede entender sin recordar los efectos que produjo el neoliberalismo en el Ecuador. No solo porque el mismo presidente ha hecho de la “larga noche neoliberal” un símbolo que marca la ruta de cambio y reversión de las políticas estatales neoliberales, para lograr los objetivos de superar las terribles condiciones de pobreza a las que la sociedad llegó gracias a la reducción del Estado (privatización y des-institucionalización), lograr un mayor control sobre el mercado, eliminación de la flexibilización laboral, combate a la oligarquía, etc. Además, hay que decir que aquella crisis quedó grabada en la memoria de la población y ha sido invocada por el gobierno para legitimar los avances sociales y señalar a los culpables del “atraso”. La siguiente declaración de Correa frente a las movilizaciones organizadas por CONAIE, estudiantes y trabajadores en 2015 es un buen ejemplo:

La “izquierda radical”, kamikaze de la derecha, vieja historia de nuestra América. Buscan desgastar al Gobierno, distraernos en un año económico difícil, sabotear la Revolución. Quieren volvernos al viejo país, el del chantaje de unos cuantos, el del secuestro de la salud y educación, el del robo de nuestro petróleo, el del subsidio para los ricos, como en el salvataje bancario y la sucretización, el del pago de una deuda externa ilegítima²

Lo cierto es que durante el neoliberalismo (1990-2006) los movimientos sociales fueron la estructura popular organizada más importante. La movilización en las calles le permitió al Movimiento Indígena (MI) consolidar una estructura organizativa que lo puso a la cabeza del proceso político nacional. Un proceso de rearticulaciones y coaliciones organizativas que contuvieron el neoliberalismo, levantaron una férrea oposición a las políticas de ajuste estructural (reducción del subsidios a la gasolina y el gas, alza de pasajes, etc.) y resistencia al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La acción política de los movimientos sociales no solo posicionó idearios de izquierda fuertemente golpeados por la agenda conservadora de los gobiernos neoliberales, sino que además, en términos gramscianos, desde las calles impulsó una potente resistencia que contribuyó a la crisis política, he hizo evidente incapacidad de los sectores dominantes de mantener su control y dirección sobre el resto de sectores o clases. Así, el movimiento indígena fue central en la caída del gobierno de Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en el 2000 y, aunque también participaron tímidamente, en la caída de Lucio Gutiérrez, en el 2005. En cambio las acciones de protesta urbanas se articulan entorno a un “movimiento ciudadano”, más efímero o poco orgánico, *los forajidos*.

A mediados del 2000, la disputa no logró revertir el programa neoliberal y las acciones tuvieron varios reveses³, pero la acción de los movimientos sociales pudo articularse al punto de pasar de una alternativa insurreccional a una electoral. Aquel año las acciones contra el gobierno de Jamil Mahuad les llevaría a tomar el palacio de gobierno y el congreso, organizar

² “Presidente Correa dice ‘Marchas de oposición buscan desgastar gobierno’”, en *Info Andes*, 2 de marzo 2015, en <https://goo.gl/jPliRo>

³ En 1994 el proceso de movilización no logró revertir la Ley de Desarrollo Agrario que fue el hito de la contra-reforma agraria. La constitución de 1998, aunque mostraba importantes avances en términos de derechos sociales, amplió los espacios para el libre mercado. La crisis financiera de 1999-2001 mostraba que las élites habían logrado aplicar las reformas al sistema financiero y garantizar que los fondos de los ecuatorianos y el Estado garantice su acumulación y reproducción.

un triunvirato que duró una noche; pero en el 2003, los movimientos sociales serían la plataforma para levantar la alianza electoral entre el Movimiento Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (PK), “brazo político” de la CONAIE, el Movimiento Popular Democrático (MPD) de izquierda marxista, y el Partido Sociedad Patriótica (PSP) encabezado por Lucio Gutiérrez⁴, propuesta que ganó las elecciones bajo un programa “progresista”.

La alianza del MI con Lucio Gutiérrez duraría apenas siete meses, y su salida de la coalición hizo visible sus propias contradicciones y disputas internas: en el seno de la CONAIE y el PK se destaparon las distintas fracciones políticas y disputas que hacían difícil mantener la unidad interna, haciendo visible su crisis⁵.

En nuestra perspectiva, lo fundamental de la década de los 90 es que la acción política y el “capital moral” acumulado por el MI fue más allá del *sedimento y la representación organizativa*. La disputa puso en la agenda del debate un proyecto político alternativo: el Estado Plurinacional, la interculturalidad, la soberanía alimentaria, la economía comunitaria; el reconocimiento de la diversidad (indígena, mujeres, jóvenes); la democratización y participación social (democracia participativa, presupuestos participativos, gobierno y autonomía territorial, etc.); una agenda anti-oligárquica y anti-imperialista (no a la Base de Manta, no al Tratado de Libre Comercio, no a las viejas élites y partidos). Como bien recoge Aguinaga (2009) “se puede cuestionar la “radicalidad” del movimiento, pero no es menos cierto que colocó en el debate público y en el *sentido común* de la población un programa anti-neoliberal y hacia la izquierda”.

Lo que caracterizó la crisis de hegemonía fue el momento “insurreccional” articulado al MI, un sentido común que había sido “ocupado” por un programa hacia la izquierda y, sobre todo, la clara dificultad de las élites políticas para encontrar salidas estables al proceso (el país tuvo ocho presidentes entre 1996-2006)⁶. Precisamente, hacia el 2006 la propuesta de Rafael Correa aparece en un contexto donde las organizaciones sociales no tenían la fuerza para avanzar en el programa, las élites políticas no tenían la capacidad reconstruir los consensos con la sociedad, y las fuerzas militares no estaban dispuestas promover salidas “antidemocráticas”⁷.

El nuevo gobierno y hegemonía

Entre 2007 y 2014 el gobierno de Correa logró mantener una enorme popularidad: triunfó en seis procesos electorales que lo mantuvieron como un líder indiscutible y sostuvieron la mayoría en la Asamblea Nacional Constitucional, convirtiéndose en la primera fuerza electoral a nivel nacional y local. Esta situación le permitió imponer su proyecto y desplazar así al conjunto de competidores, sean de izquierda o de derecha.

⁴ Teniente coronel que participó en la caída presidencial del 2000.

⁵ Sobre la crisis de la CONAIE pueden revisarse los trabajos de Ospina, Kaltmeier y Büschges, 2009 y Santillana y Herrera, 2009.

⁶ Véase: Unda, 2015.

⁷ En este mismo sentido se puede revisar la propuesta de Massimo Modonesi (2012) que interpreta a los gobiernos progresistas desde las categorías de *revolución pasiva* y *cesarismo*.

Frente al avance político, las críticas al gobierno se concentraron en reforzar la particularidad carismática del presidente, su acción mediática discursiva (el control de medios y el uso de la propaganda) y sus “políticas de represión”. A esto se sumaron también procesos de cooptación y articulación clientelar para mantener el control sobre los sectores organizados y populares, así como la enorme cantidad de inversiones sociales que le permiten mantener su alta popularidad. Sin duda todas son estrategias importantes en la construcción hegemónica, pero en una perspectiva gramsciana, asumiendo que la capacidad de control y dirección de un sector sobre el conjunto de la sociedad, es una dinámica compleja que se compone de acciones/políticas de contención y de consenso, a través de los cuales logra, *principalmente*, la participación activa y voluntaria de la población y de los sectores subalternos en su proyecto, es necesario matizar en el debate explorando la *dinámica de esa construcción hegemónica* y su condición *inestable*.

Para esto es posible dividir el proceso en tres momentos: un primer momento de articulación / movilización en el que primaron los consensos activos de los sectores populares organizados; un segundo momento en el que primaron las acciones de coerción sobre las organizaciones; y finalmente un período de incertidumbre en el que primaron los límites de la hegemonía y alianzas contradictorias.

El nuevo consenso

Rafael Correa no es una figura que viene de la base de las organizaciones que sostuvieron la resistencia al neoliberalismo, era un intelectual que mantuvo posiciones críticas frente a las tesis neoliberales y la dolarización de la economía. Su imagen creció cuando participó como ministro de economía en el gobierno de Alfredo Palacio –recambio vicepresidencial de Lucio Gutiérrez (2003)– y abanderó los intercambios comerciales con Venezuela y la integración latinoamericana. Lo importante a señalar de Correa es que su programa y discurso recogieron las demandas de las organizaciones sociales, convirtiéndose en espacio de articulaciones, a nuestro modo de ver ocupando el vacío dejado por los movimientos sociales en crisis, pero esta vez en el marco de una “nueva alianza” de sectores medios y organizados de distinta posición ideológica.

Aunque inicialmente las organizaciones sociales miraron con desconfianza la candidatura de Correa, buena parte de ellas y figuras políticas de izquierda se sumaron a la propuesta. Si bien hubo intentos de articulación con el movimiento indígena, a pesar de la presión de algunas organizaciones de base que demandaban la alianza política, el movimiento indígena prefirió participar con candidatos propios y evitar la dispersión política; pero con la “izquierda partidista” (MPD) el núcleo de Alianza País (AP) siempre mantuvo una distancia política. Sin embargo, en la segunda vuelta se produjo una articulación/movilización del conjunto de organizaciones, tanto las cercanas a Correa, como las que no. La presencia y posible victoria de Álvaro Noboa –uno de los hombres y familias más ricos del país– articularon los “sentidos anti-oligárquicos” y las posicionó en la defensa del proyecto encabezado por el presidente Correa. Así, sin aliarse a AP, la gran mayoría de organizaciones participaron activamente en el impulso del proceso; por un lado, sirvieron de base electoral para el candidato, lo invitaron a exponer sus propuestas y aprovecharon para lograr “acuerdos” políticos y condicionar su voto, “acuerdos” con los que salieron luego a difundir la

importancia del candidato en sus luchas⁸; por otro lado, se articularon para disputar el voto en las calles y contener la presión electoral de Álvaro Noboa.

Una vez que se ganó el gobierno, en sintonía con los discursos del presidente y sus demandas propias, las estructuras partidistas de izquierda prestaron sus votos al gobierno en el Congreso Nacional⁹ para impulsar la convocatoria para una Asamblea Constituyente que definiera una nueva constitución. Finalmente, en medio de un entorno político conservador que presionaba por mantener lo que se había logrado con el neoliberalismo, las organizaciones trabajaron arduamente haciendo la antesala política y disputando sus tesis teórico políticas en la Asamblea Nacional Constituyente y salieron a las calles a promover su aprobación en el referéndum 2008.

Varios movimientos sociales mantuvieron sus acciones de resistencia y presión, pero el gobierno logró “negociar” los conflictos; la gran mayoría de organizaciones decidieron frenar sus acciones (resistencia a la minería en el sur y en Intag, demandas de recursos en la zona norte de la Amazonía, la disputa por el agua en la Sierra) y mantener un voto de confianza a Alberto Acosta, representante de la izquierda en el gobierno (Latorre y Herrera, 2013), y luego, salieron a defender la nueva constitución en las calles y en referéndum para su aprobación¹⁰.

Ninguna de las organizaciones estuvo plenamente contenta con los resultados constitucionales, o no logró el conjunto de sus demandas. De hecho, fue el propio gobierno quien marcó los límites del debate constituyente en temas tales como el aborto, los derechos de los trabajadores, el control del territorio, la explotación minera, el reconocimiento del Estado Plurinacional, la redistribución de la tierra, la desprivatización del agua o la participación social. Incluso, bajo el argumento de acelerar el proceso constituyente que se entorpecía por un “exceso de debate”, el gobierno fue el principal promotor de la salida de Alberto Acosta¹¹. Sin embargo la constitución marcó avances y la organización pos-

⁸ Rafael Correa como candidato estuvo en varios lugares visitando a las organizaciones y prometiendo su apoyo, en Baba se presentó para decir que la represa no iría; en Victoria del Portete prometió acabar con la minería; en la plataforma Bi-provincial amazónica reafirmó su apoyo al desarrollo; en San Pablo de Amalí prometió expulsar a la represa. Véase: Latorre y Herrera, en Herrera, Latorre, *et al*, 2013.

⁹ El Pachakutik (PK), Partido Socialista (PS), Movimiento Popular Democrático (MPD), Ruptura de los 25 establecieron una alianza con el gobierno para impulsar el debate en el congreso, dado que el gobierno no impulsó candidatos. Luego, sería claro que tal alianza no sería suficiente, sino que pactaría con el PSP de Lucio Gutiérrez para romper la resistencia del congreso.

¹⁰ El mejor ejemplo fue que en “agosto de 2008 se conformó una gran coalición de organizaciones que promovieron junto a Alianza País, el Partido Socialista, el Movimiento Popular Democrático, y el Pachakutik el voto por el “Sí”. En esta propuesta estuvieron: Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), Federación Única Nacional de Organizaciones del Seguro Social Campesino (FEUNASC), la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, la Confederación Única de Comerciantes Minoristas, la Confederación de Mujeres del Ecuador por el Cambio y la Unión de Artistas Populares”. Ver: “Partidos y Organizaciones de izquierda se unen por el sí”, Relaciones Públicas del MPD, 23 marzo del 2009, en <http://www.mpd15.org.ec/boletines.htm#ma114>.

¹¹ “Acosta dijo esta tarde que su posición de tomar más tiempo para pulir los textos constitucionales no es compartida por la mayoría de la cúpula del movimiento oficialista Acuerdo PAIS, al que reafirmó su apoyo” (Alberto Acosta renuncia como presidente de la Asamblea”, *El Universo*, Quito, 23 de junio del 2008, en <https://goo.gl/Z5bmMZ>)

constitucional del Estado se convirtió en la promesa de un nuevo avance. Así, la constitución y la organización posconstitucional se convirtieron en la nueva plataforma de disputa, tanto del gobierno como de las organizaciones.

Paradójicamente, mientras las organizaciones invertían sus fuerzas en el debate constitucional, el gobierno trasladó sus esfuerzos en la reorganización del Estado y la política pública desde el ejecutivo. Lo singular del momento es que, a pesar de la demanda de las organizaciones y la articulación inorgánica, las posiciones del gobierno diferenciaron el campo popular: las organizaciones de izquierda con base social organizada (CONAIE, Frente Popular) mantuvieron sus distancias; algunas no negociaron del todo sus estructuras (Partido Socialista, Fenocin) y las que participaron decididamente no fueron las de base popular más amplia (MIR, Partido Comunista, CNC-Eloy Alfaro, Confeunassc, etc.).

Hacia el 2014, el valor del gobierno y la incorporación de los sectores medios, de izquierda o no, a las estructuras gubernamentales se tradujo en un enorme esfuerzo por racionalizar/modernizar al Estado en la perspectiva de que sus inversiones sean más eficientes: renovar la inversión social en educación, salud e infraestructura, crear fuentes de trabajo, ampliar la seguridad social y recuperar la capacidad adquisitiva de la población, revirtiendo así las condiciones de marginación y de pobreza que el modelo neoliberal había creado (Ospina en Edgardo Lander *et al.*, 2013). A diferencia del neoliberalismo esto se tradujo en un enorme proceso de inclusión social.

En nombre de la revolución ciudadana y los avances constitucionales, se crearon espacios institucionales y leyes para fomentar la participación social – la Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales (2007), el Concejo de Participación y Control Social (2009) y la Ley de Participación Ciudadana (2011) — pero esto no se tradujo en una estructura de representación política. Sino que las estructuras de “participación social” y sus procedimientos sustituyeron la representación social. En otra perspectiva, en la medida en que en la “recuperación” del Estado demandaba de la acción de los “mejores militantes”, el gobierno incorporó en la administración estatal a alguna dirigencia o intelectual de izquierda, lo cual generó enormes expectativas, que si bien fortaleció la fidelidad de las organizaciones con el gobierno, no se tradujo en el fortalecimiento de las bases organizadas. Su interpelación a los sectores populares se concentró en la participación electoral y la defensa del voto, pero, a pesar de disponer de un movimiento político propio (Alianza País) y la alianza política con varios sectores, trasladó el trabajo de articulación organizativa a las estructuras de gobierno y el Estado, dependiendo así de la capacidad gubernamental para movilizar las estructuras estatales o desde las estructuras estatales. Frente a la acción autónoma y la presión de sus “bases”, personalizó las decisiones en sus “amigos de confianza” o subordinó los procesos organizativos a la emergencia electoral del momento¹².

¹² En un trabajo comparativo sobre las dinámicas entre los movimientos sociales y el gobierno comparando las provincias de Chimborazo y Los Ríos, podríamos observar que, a pesar de que las organizaciones locales y de base se esforzaban por darle una estructura local a Alianza País, disputando incluso a las posiciones más conservadoras presentes al interior de las organizaciones, la palabra final sobre los candidatos y representantes del partido se tomaban verticalmente, según la mayor o menor importancia local de los amigos del presidente. Véase: Stalin Herrera, 2011.

Así, en el tiempo, la hegemonía del gobierno creció a costa de la debilidad organizativa: ninguna organización mostraba signos de fortalecerse políticamente, algunas pasaron a la clara oposición, otras se fracturaron en el proceso y el resto apenas logró “negociar” un espacio en la agenda de reformas e inclusión social. Contradictoriamente, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población tuvo un efecto desmovilizador: la ampliación del empleo resultado del crecimiento estatal rearticuló las clase medias a las cadenas de transmisión de la estructura de dominación y de control, y se volvieron menos “sensibles” a las demandas políticas de las organizaciones populares; la ampliación del Estado y el incremento salarial se convirtieron en una promesa de ascenso social; mientras que la defensa de sus empleos las hizo más afines al programa del gobierno. En el caso de los sectores populares, al resolver parte de sus demandas (salir del empobrecimiento generalizado de los noventa) reconstruyeron su afinidad / fidelidad con las propuestas del gobierno; construyendo una nueva subjetividad que se aleja de los viejos discursos de las organizaciones y; luego, el proceso de organización se hizo más “costoso”.

En términos gramscianos, se produce una paradoja para las organizaciones de izquierda que participan con el gobierno: en la medida en que el Estado es una estructura de representación de clase y los sectores de izquierda no logran disputar la dirección del mismo, las organizaciones participan activamente en la recomposición del Estado y del impulso del nuevo gobierno, pero la expansión del mismo, la reincorporación de las clases medias en las cadenas de transmisión de la estructura de control de la población, así como la satisfacción de necesidades / demandas de los sectores más empobrecidos, no funcionaron como herramientas de emancipación, sino que desmontaron molecularmente el “ideario de izquierda” que los movimientos sociales habían posicionado en la sociedad.

Hegemonía de coerción y consenso

Pasada el proceso constituyente hubo un proceso intenso de “reconstrucción” institucional y normativa que inicialmente generó muchas expectativas. Pero el gobierno, a pesar de los avances constitucionales y su mayoría en la asamblea nacional, luego del 2008, no avanzó en la solución de las demandas de las organizaciones sociales, sino que su posición se volvió “conservadora”.

Las organizaciones no dejaron de presionar sobre el gobierno y demandaron la profundización de los avances constitucionales, pero a pesar de esta presión, el gobierno impulsó una reforma normativa que resultó conservadora: trasladando la presión indígena y campesina por la redistribución de activos productivos y la soberanía alimentaria a una ley (Ley orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, 2010); limitando los derechos de organización y de huelga de los trabajadores públicos (Decreto Supremo 1701 del 2009 y Ley Orgánica de Servicio Público 2010); impulsando la explotación de pozos petroleros en la zona sur (XI Ronda Petrolera, 2012); abriendo la explotación de minería a cielo abierto (Ley de Minería, 2013); impulsando la expansión de las fronteras petroleras en el parque nacional Yasuní (2013), limitando el derecho a la libre organización (Decreto 16, 2013); fomentando la producción y expansión de agro-combustibles (Decreto Supremo 1303, 2012), restringiendo la democratización y desprivatización de agua de riego (Ley de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, 2014), garantizando la gran propiedad a costa de la

criminalización de la toma de tierras (Ley Orgánica de Tierras Rurales y territorios ancestrales, 2016); criminalizando la protesta social (Código Orgánico Integral Penal 2016); y además, alineando los intereses de la planificación nacional con los intereses del capital (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017).

Un proceso de reformas que, si bien fueron criticadas por las organizaciones y movimientos sociales, se inscribieron conflictivamente con la idea de “participación activa” y legitimación de las organizaciones afines al régimen. Este fue un período en el cual el campo popular se fracturó entre los organizaciones que resistían e interpelaban las reformas y que las que las legitimaban¹³. La reforma legal institucional fue una fractura en la que el gobierno se alineó con los intereses de las elites económicas a pesar de su hegemonía política (discurso, mayoría en la asamblea, control del estado, control de medios públicos, etc.). Se efectuó así un paso de una crisis hegemónica a una recomposición del modelo de dominación de la mano del Estado y con enormes ganancias para los sectores modernos de la economía.

Hegemonía sin consensos

Antes de la promulgación de la nueva Constitución, el gobierno debió enfrentar la presión política de las organizaciones sociales que encontraron en esa coyuntura las posibilidades de posicionar sus conflictos creados durante los años del neoliberalismo. De hecho, bastante antes de que Rafael Correa llegara a la presidencia, en el Ecuador se habían abierto otros ejes del conflicto social que no estaban representados en la CONAIE (Latorre y Herrera, en Herrera, Latorre, *et. al.*, 2013). Durante el período inmediatamente anterior al gobierno de Correa (2004-2007), las organizaciones sociales habían mantenido una disputa territorial “exitosa” y configuraban articulaciones políticas importantes¹⁴:

- Los conflictos mineros en el sur del país e Intag que lograron en la coyuntura articularse en torno a la Asamblea Nacional Ambiental y la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida y la Soberanía Alimentaria (CNDVSA); y que ese contexto realizaron grandes movilizaciones que terminaron en 2007 obligando al gobierno a levantar un Dialogo Minero e impulsar el Mandato Minero, así como la reversión de las concesiones mineras.
- En la zona norte de la Amazonía la Asamblea Bi-Provincial entre Orellana y Sucumbíos (2002), se convirtió en el centro político de las demandas por la atención del gobierno en temas tan básicos como vialidad y que en el marco de la coyuntura se planteaban hacer un paro de las actividades petroleras.

¹³ El FUT se fracturó para competir con la CUT, afín al gobierno; la CONAIE debió soportar duras tensiones internas resultado de que las estructuras locales y regionales se posicionaron a favor y en contra del gobierno, fracciones pro-gobierno disputaron duramente la dirección la de la regional del Ecuarunari; mientras que la regional amazónica COFENIAE se dividió en dos; la FENOCIN también se fracturó en dos y su sede fue ocupada a la fuerza por las organizaciones afines al gobierno.

¹⁴ La única excepción serán los trabajadores y organizaciones sindicales que previo al gobierno no habían logrado una rearticulación importante (Herrera, en Barattini *et.al.*, 2016)

- Para las mismas fechas varias organizaciones (CORDENAGUA en la zona de Quevedo y el Frente de Defensa del Río Dulcepamba en Chillanes) lograron articularse en torno a la resistencia frente la construcción represas hidroeléctricas y proyectos multi-propósitos.
- A esto se sumó la presión en torno a la redistribución del agua que había en el seno de las organizaciones indígenas (1996 se impulsa el primer proyecto de ley) y lograron un espacio de articulación con el Foro de Recursos Hídricos e impulsaron una importante presión en la Asamblea Nacional Constituyente para lograr su desprivatización y democratización.

Como puede observarse, al iniciar el gobierno de Alianza País, aunque el movimiento indígena se encontraba en crisis, existía un sedimento organizativo con enorme potencia y capacidad de movilización. Se trataba de organizaciones que molecularmente y en disputas con empresas transnacionales habían logrado salir de los reductos locales y plantear articulaciones regionales y acciones que pusieron su agenda en el debate nacional. Si bien, las organizaciones no dejaron de disputar el escenario político y legal¹⁵, hasta el 2014 no lograron hacer de la conflictividad social un espacio de acumulación política. Sino que, en la medida en que el gobierno avanzó en sus posiciones conservadoras las organizaciones fueron radicalizando el conflicto¹⁶, una dinámica sobre la cual el gobierno “requirió” mantener su posición de “hegemonía” y desarrolló una *estrategia compleja de coerción* que se sostuvo en la rearticulación de los aparatos estatales y de gobierno para la “gestión territorial del conflicto”.

En esta estrategia se inscribieron los permanentes ataques e intentos de desprestigio que ejerció el gobierno sobre las organizaciones, cuyo ejemplo fueron los discursos presidenciales en las sabatinas, las intervenciones de ministros, y la propaganda y el uso de los medios de comunicación públicos. Sin embargo a esto se sumaron las estructuras estatales que desarrollaron inversiones de manera discrecional (camino, escuelas del milenio, subcentros de salud, agua potable, capacitación en ciudadanía, etc.) y/o sirvieron para incorporar a los dirigentes sociales en la implementación de los programas, negociar el malestar e incorporar a la población local en ciertos trabajos, con lo cual la movilizaciones frente al gobierno terminan siendo movilizaciones en contra de familiares o amigos que trabajan en las filas gubernamentales.

Pero el proceso de intervención/captación/contención territorial se caracterizó por la rearticulación de los aparatos coercitivos (Estado, gobierno y fuerzas militares y policiales) en una estrategia que fue más allá de la judicialización y criminalización, sino que, en términos gramscianos, intervino y aprovechó las tensiones locales y/o las contradicciones de las

¹⁵ En el 2008 acciones contra el decreto 1701; 2009 marchas por la ley de agua; 2011 marchas contra la XIva ronda petrolera, 2012 marcha por el Agua, la Dignidad de los Pueblos y la Soberanía con más de 70.000 personas y la recolección de 40.000 firmas para impulsar la Ley de Tierras para la redistribución de tierra; 2014 recolección de 500.000 firmas para el referéndum para evitar la explotación del Parque Nacional Yasuni; hacia finales del 2014 los sindicatos habían salido a las calles más de 15 veces.

¹⁶ Las cifras de los conflictos levantadas por el Centro Andino de Acción Popular muestran que la conflictividad social se incrementó por encima de los registros en el período de la crisis económica en 1999. Lo curioso es que esta conflictividad no estuvo asociada a la crisis, sino a un período de relativa bonanza y estabilidad económica en el marco de un gobierno que se definía de izquierda, de gran popularidad y que se había caracterizado por realizar un enorme gasto social, véase: Sánchez, en Herrera, Latorre, et. al., 2013.

organizaciones. Con estas palabras lo expresaba un ex dirigente de la Asamblea Bi-Provincial y exfuncionario de Ecuador Estratégico en Sucumbíos:

“Se puede decir que hubo una estrategia de carácter político electoral. De hecho aquí en Orellana donde Pachakutik con Guadalupe [Llori] era la principal fuerza, ahora sólo está ella, muchos alcaldes se le fueron por estos acuerdos políticos. Ecuador Estratégico ha servido para generar un *escenario de negociación política*” (ex dirigente de la Asamblea Bi-Provincial y exfuncionario de Ecuador Estratégico en Sucumbíos, citado en Latorre y Herrera, 2013)

Ahora bien, si retomamos nuestro análisis en clave de Gramsci, puede interpretarse que el gobierno de Rafael Correa no solamente utilizó la capacidad represiva de Estado, sino que también utilizó los aparatos gubernamentales y estatales para seducir/negociar a las bases organizadas, aprovechando sus contradicciones y diferencias internas. El resultado final fue la construcción o reconstrucción de la fidelidad política con el gobierno creando nuevas relaciones fuerza a nivel local. Un dirigente de Intag afirmó lo siguiente respecto de la relación entre el presidente Correa y las organizaciones sociales:

“En las sabatinas lo que hace es decir que los dirigentes no representan a nadie, organizaciones financiadas desde el exterior, son cuatro pelagatos, gringuitos de ojos azules, ¿quiénes son? Y eso se repite aquí también.” (Dirigente de Intag, citado en Latorre y Herrera, 2013)

Lo que nos interesa demostrar es que, a diferencia de los gobiernos neoliberales que también intentaron “gestionar los conflictos”, la recomposición del Estado le dio al gobierno de Alianza País mayor capacidad de contención y coerción. La combinación de un discurso gubernamental (presidente y ministros) que desprestigiaba a las organizaciones, la inversión social discrecional en las zonas de conflicto (planes, programas, proyectos e infraestructura), la seducción de dirigentes sociales (cargos en estructuras de estado o en espacios de representación), y el asedio policial local y la judicialización de dirigentes, lograron llevar el conflicto a las estructuras de base. Y con esto logró ampliar su hegemonía, cambiar la composición política territorial, romper la fidelidad o solidaridad organizativa y, finalmente, hacer del proceso organizativo una acción cada vez más costosa.

Giros contra-hegemónicos

Entre el 2014 y el 2017 el gobierno daba muestras de debilidad hegemónica. El 2014, comenzó con los resultados electorales en los cuales Correa se alzó con el 57% de votos y AP se mantuvo como la primera fuerza. Sin embargo, no tuvo la capacidad de transferir la popularidad presidencial a las candidaturas locales y regionales. En estas elecciones AP perdió en casi todas las cabeceras provinciales y en las ciudades más importantes (Quito, Guayaquil y Cuenca) donde se apostaron los representantes más importantes de la oposición de derecha.

Las “organizaciones” en cambio ganaron en casi todos los municipios en que se sostuvieron importantes procesos de resistencia, pero perdieron las juntas parroquiales en las que estaban asentadas las minas y proyectos estratégicos. Este resultado mostró que la estrategia de intervención territorial era potente para localizar el conflicto, pero no para convencer al conjunto de la población del municipio. Los resultados locales cambiaron la balanza política para las organizaciones locales y estas mostraron que mantenían una importante fortaleza territorial. A pesar de que el candidato Alberto Acosta (ex funcionario de

AP) articuló una alianza entre organizaciones de izquierda y los movimientos sociales, no logró ni el 3% de las votaciones. Mientras que entre el 2014 y 2015 el movimiento de trabajadores y sindicatos –encabezados por la Federación Única de Trabajadores FUT– ganó posiciones y logró la articulación de otros sectores (jóvenes, ecologistas, mujeres, afiliados al seguro social, médicos, petroleros), en especial el movimiento indígena (CONAIE). Sin embargo, las acciones¹⁷ no lograron revertir la crisis y mejorar su capacidad de negociación frente al gobierno, que realizó una campaña mediática donde enfatizó sus avances en el mundo laboral.¹⁸

La derecha en las calles

Hacia junio y julio del 2015, se produjo una coyuntura política compleja. El gobierno, seguro de su popularidad y de su mayoría en la Asamblea Nacional, presentó la “Ley de Plusvalía y Herencia” que intentaba ampliar la base impositiva afectando la gran propiedad y la herencia, y con esta iniciativa abrió un escenario de conflicto con dos actores: los sectores medios/medios altos y la derecha. Los primeros en reaccionar contra la propuesta del gobierno fueron sectores de clases medias que tomaron la avenida de los Shyris con banderas negras por varios días (10 de junio al 7 de julio de 2015, cuando llegaba la visita papal). A este espacio se articulan representantes de los partidos de derecha que hacen de la protesta una plataforma de disputa política; por un lado, la alianza entre CREO y PSP; y por otro lado, la alianza de los líderes locales que ya había nacido luego de las elecciones en febrero del 2014 (Nebot en Guayaquil, Rodas en Quito, Carrasco en Cuenca y Falquez en Machala). Lo importante de estos grupos es que, no solo se suman a las movilizaciones, sino que convocan a la población a oponerse a la prepotencia del gobierno, demandan rectificaciones, asumen en su agenda las demandas de los trabajadores contra la ley de justicia laboral y organizan movilizaciones en sus regiones; la más importante, la que convoca Jaime Nebot en Guayaquil el 25 de junio, donde, usando todos los recursos posibles (clientelismo político, liberación de pago del pasaje en el sistema de buses, propaganda pagada por el municipio) y acompañado por la prensa, logra una enorme movilización de, según sus datos son 300.000 personas, que en cálculos más sensatos podrían ser 100.000. Pero lo importante es que la derecha demostró que no estaba acaba, que actuaba articuladamente y que mantenía los instrumentos que sostienen su capital político en las regiones, es decir, la dirección moral y espiritual sobre la sociedad local.

¹⁷ Entre las acciones que levantaron los movimientos sociales destacaron: la recolección 756.000 firmas para llevar la explotación de Yasuní a consulta en abril del 2014; el 1ro mayo del 2014 mostró que la marcha de trabajadores en oposición del gobierno era mayor que la oficialista; en la Marcha por la Unidad de los Trabajadores Convocada por el FUT en septiembre del 2014 participaron más de 30.000 personas; se convocó a una marcha contra la política laboral del gobierno en noviembre de 2014, en la que participó la CONAIE en su convocatoria; la Cumbre de los Pueblos del 5 de marzo de 2015; la marcha convocada por FUT-CONAIE-Frente Popular el 19 de marzo 2015; la histórica marcha del primero de mayo en el 2015 (aparecieron tres marchas, la pro gobierno, de la FUT y otra del Parlamento Laboral que hasta hace poco había sido base del gobierno), pero lo distintivo es que el gobierno no logró la gran movilización anunciada en defensa de la “revolución del trabajo”.

¹⁸ Es importante mencionar que Carlos Marx Carrasco planteó que “Los avances son notables hoy contamos con salarios dignos, se puso fin a la tercerización, contamos con política salarial, nos preocupamos por las trabajadoras remuneradas del hogar, personas con discapacidad y demás sector vulnerables. Durante estos ocho años se han registrado más de mil organizaciones de trabajadores, 50 por ciento más que todos los años anteriores”. “Dirigentes y líderes sindicales le apuestan a la gestión y diálogo social”, Ministerio del Trabajo, 31 de marzo 2015, en <https://goo.gl/Atmeml>

Los movimientos sociales en las calles

Así, en medio de una avanzada conservadora frente al gobierno, la CONAIE convocó a un “levantamiento indígena”¹⁹ el 18 de julio 2015, a pesar de las distintas posiciones de las organizaciones indígenas en torno al gobierno y el “miedo” instalado entre algunos dirigentes:

“¿Estamos preparados para un levantamiento de esta magnitud? ¿Y si nuevamente nos enjuician?”. Esas fueron dos preguntas que predominaron la cita. “Compañeros, sin miedo. Nuestra lucha es justa”, gritaban indígenas desde el fondo del salón. Otro decía que deben prepararse “para actuar con sabiduría en caso de represalias. Hay compañeros que están enjuiciados y cerca de la cárcel”. (Dirigente de la CONAIE, citado en *El Comercio*, 2 de Agosto 2015)

Fue una convocatoria que realizó en unidad con el FUT convocando a un paro nacional contra las enmiendas constitucionales que permitirían la reelección presidencial. Así, la agenda indígena y de los trabajadores se articularon contra el gobierno y se convirtieron en el espacio alternativo que articuló el descontento de otros sectores. Allí, se sumaron los “Yasunidos”, la Federación Médica Ecuatoriana, la Federación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (FEUNASSC), la Federación Ecuatoriana de Estudiantes Secundarios (FESE), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular (cuatro últimas organizaciones ligadas al PCMLE), los jubilados, la Asamblea de Barrios y Trabajadores Municipales en Quito, la Coordinadora de Movimientos Sociales de Azuay²⁰, y campesinos y organizaciones del sur del país.

El acuerdo de las organizaciones indígenas y sindicales fue iniciar una marcha el 3 de agosto desde Tundame en Zamora (500 km de Quito) –una localidad que enfrentada los avances de una mina de cielo abierto impulsada por capitales chinos –, bastión de la resistencia anti-minera; la cual llegaría a Quito el 13 de agosto para sumarse al paro nacional. En términos generales la acción tuvo efecto importante: primero, logró distanciarse de las acciones y proyecto de la derecha que apostada en la Shyris marcaba el ritmo de la oposición frente al gobierno; segundo recuperó las calles como herramienta de disputa, en tanto espacio simbólico de lucha política y la movilización social; y finalmente, puso en la agenda pública las demandas de las organizaciones²¹.

¹⁹ Entre las demandas que articularon la acción la marcha estaban: la judicialización de los dirigentes, la revisión de la Ley de Tierras, la contención de la minería, la educación intercultural bilingüe, el libre acceso de los jóvenes a la educación.

²⁰ “Ciudadanía cede el paso de las protestas a las organizaciones”, *El Comercio*, Quito, 16 de Julio 2015, en <https://goo.gl/8d5odb>.

²¹ Primero: “En la ciudad de Quito se convocó la Asamblea por la vida, por la dignidad y por la democracia por el colectivo Nacional de Dirección Unitaria se plantea delegados y delegadas de las organizaciones sociales”. Segundo: “Como punto fundamental el archivo de las enmiendas constitucionales y toda ley que afecte la naturaleza”. Tercero: Para convocar a la marcha por la libertad de los presos políticos, el próximo miércoles 26 de agosto”. Cuarto: “La Asamblea convoca a la sexta convención de trabajadores y movimientos sociales el 29 de agosto”. Quinto: “La Asamblea Nacional Popular, por la vida y por la dignidad planea reunirse el 15 de septiembre en Quito”. Sexto: “La Asamblea convoca la marcha nacional al 16 de septiembre”. Séptimo: “La Asamblea muestra solidaridad a Manuela Picq”. Sin embargo, esto fue modificado para realizar acciones de solidaridad con todos los presos políticos. Octava: “Se convoca a varias acciones en el país porque la lucha

Sin embargo, el gobierno ensayó y repitió todo su arsenal (discursos del presidente, sabatinas, movilización de ministros y el despliegue de medios de comunicación) que intentó posicionar en la opinión pública un hecho: ubicar a las acciones como parte de una “restauración conservadora” y llamar al diálogo a la población. Al mismo tiempo intentó reforzar su presencia en las calles convocando a la población y articulando a sus aliados políticos (Alianza Indígena, Parlamento Obrero, Central Única de los Trabajadores, fracciones del Partido Socialista y el Partido Comunista, Mujeres por el Cambio, etc.), pero a pesar de los esfuerzos, resultó claro que no lo logró. Esto quedó demostrado en que el gobierno decidió cambiar la movilización por el “Festival de la alegría”, concentrando a sus organizaciones aliadas en la Plaza Grande de Quito.

En nuestra evaluación, en esta coyuntura el gobierno no demostró capacidad de movilización. Esto tal vez se relacionó con que las organizaciones afines al gobierno no tenían una base social importante para posicionarse en las calles. El presidente acusó a las organizaciones de ser parte de una conspiración y restauración conservadora y movilizó a 15000 policías, intervino las acciones de protesta (lugares paralizados por los indígenas y trabajadores) y encarceló a varios dirigentes. Las movilizaciones y paros en distintas provincias (Pichincha, Guayas, Imbabura, Cotopaxi, Esmeraldas, Cañar y Pastaza) terminó con 126 detenidos, de los cuales tres recibieron detención preventiva (Quito) y once fueron procesados por ataque y resistencia (Saraguro). Así, interpretamos que la respuesta del gobierno tomó dos caminos: frente a la movilización indígena y de los trabajadores, la respuesta fue la represión y judicialización de los dirigentes. Mientras que frente a la demanda de los sectores de derecha y las clases medias la Secretaria Nacional de Planificación lanzó el “Dialogo Nacional” que aunque no logró la participación de los sectores y organizaciones en oposición, sirvió para reafirmar su posición por el diálogo y desprestigiar los discursos más incendiarios.

Las acciones de protesta que iniciaron el 2 de agosto de 2015 en Tundaime, terminaron el día 21 con una Asamblea Popular y una marcha frente a la fiscalía reclamando la liberación de los detenidos. Posteriormente las acciones de movilización resultaron tímidas y con poco éxito. Las organizaciones volvieron a movilizarse el 16 de septiembre; en noviembre el presidente retiró de las propuestas de enmiendas constitucionales que posibilitarían su reelección; en diciembre el Frente Popular en Guayas volvió a las calles. Más tarde, en febrero de 2016 se reactivaron las tensiones entre trabajadores y gobierno resultado del impulso de este de una Ley de Justicia Laboral; en julio la CONAIE y el PK presentaron una petición de amnistía por los apresados en el paro nacional; y en diciembre 2016 los indígenas de Tundaime tomaron el campamento de la minera china y fueron duramente reprimidos por el gobierno; después de estos hechos el gobierno llegó a iniciar acciones para cerrar la ONG ambientalista Acción Ecológica.

De modo que el movimiento indígena y el movimiento de trabajadores cerraron el año con relativo éxito, con acciones de protesta, los recursos legales, propuestas presentadas a los representantes del gobierno. Además, estas demostraciones de fuerza y capacidad de

continúa”. “Resoluciones de la Asamblea Popular”, *El Comercio*, Quito, 21 de Agosto 2017, en <https://goo.gl/n7MVkz>.

movilización contribuyeron a que el presidente Correa diera un paso al costado con las iniciativas institucionales que permitieron su candidatura a la reelección.

El último giro

En 2017, a pesar de que Alianza País ganó con un estrecho margen y eso creó las condiciones para la continuidad de la “Revolución Ciudadana”, la ausencia o retiro de Rafael Correa parece haber cerrado un ciclo en la política nacional. La figura del presidente ha sido central para el éxito del proceso, razón por la cual su sustitución en el escenario electoral generó muchas dudas y los competidores organizaron su campaña en torno a Correa y no frente a Lenín Moreno, el verdadero candidato. Pero no es interés de este punto entrar en detalle de la campaña electoral que permitió a Alianza País asegurar su continuidad, sino resaltar tres hechos que a nuestro modo de ver cambian el escenario político.

El gobierno hizo lo posible para mantener a Rafael Correa como su candidato, pero la resistencia por parte de los movimientos sociales y los sectores conservadores del país (lo cual incluye a los medios de comunicación) cerraron tal opción. Sin embargo, el despliegue del gobierno durante el 2016 y la misma campaña mostraron que el manejo de las estructuras estatales lo dotaban de mucha fortaleza y capacidad de maniobra. En suma, aunque en un año el gobierno no logró revertir la resistencia y la caída de su popularidad, sorteó el escenario con éxito, llegando a las elecciones en unidad y con un buen candidato.

Del otro lado, los sectores conservadores mostraron enorme diferencias políticas, no tuvieron la capacidad de articularse en torno a una candidatura y sobre todo fue evidente que no habían renovado su discurso y no tenían un proyecto alternativo. En tales circunstancias, llegaron a las elecciones con cuatro candidatos claramente alineados con viejos partidos populistas y/o de derecha, pero una vez pasada la primera vuelta se alinearon con la “mejor opción” de derecha: Guillermo Lasso.

A lo largo del 2016 varios dirigentes del movimiento indígena intentaron llevar a las organizaciones sociales y al PK hacia Guillermo Lasso (CREO), mantuvieron negociaciones con la oligarquía más rancia e intentaron romper con la frágil articulación política interna de los movimientos sociales. El escenario electoral evidenció las fracturas internas, las distintas tendencias que conviven al interior de los movimientos y que hicieron imposible una estrategia propia o una articulación sólida en torno a la candidatura de Paco Moncayo y el “Acuerdo Nacional por el Cambio”, una plataforma de centro izquierda en la que participaron el PK, ID, Unidad Popular, Centro Democrático, y otras organizaciones sociales. A pesar de que la propuesta inició de manera interesante, no logró convertirse en una alternativa y diferenciarse de los discursos de cambio de la derecha o del gobierno, sino que dirigió su campaña contra Rafael Correa olvidando al candidato, Lenín Moreno.

A pesar de todos los medios de los que dispuso Alianza País mantuvo la mayoría en la asamblea pero no obtuvo la distancia necesaria de Guillermo Lasso (CREO) y fueron a segunda vuelta electoral. En la segunda vuelta ganó Lenín Moreno (Alianza País) con un margen muy estrecho del 2%. Para finalizar, debe decirse que tanto en la primera y segunda vuelta electoral el movimiento indígena volvió a mostrar sus diferencias políticas internas; aunque varios grupos llamaron a las organizaciones a posicionarse por fuera de la coyuntura

para no posicionarse por Alianza País o el banquero Guillermo Lasso, los pronunciamientos por inundaron los medios y en el imaginario solo quedó sus apoyos Lasso²²; en el caso de las organizaciones de trabajadores no solo convocaron a sus bases a votar por el banquero, sino que salieron a impugnar los resultados y sostener que hubo fraude (este fue el caso de la CEOLS y el Frente Popular). El último ciclo político de Ecuador se cerró con esa imagen: las organizaciones sociales “arrimadas” a los idearios de un banquero de derecha sin que lograr comunicar a la sociedad que su objetivo era intentar de cambiar un gobierno con cuya política no coincidían.

Conclusiones

Partimos de que, tal como lo entendió Antonio Gramsci (1999), la hegemonía no es un proceso que pueda entenderse por fuera de las fuerzas reales que disputan la posibilidad de ejercer la conducción moral y espiritual de la sociedad. Como plantean Unda (2015) y Modonesi (2012), Gramsci explicó la emergencia de figuras bonapartistas o cesaristas en medio o como resultado de una crisis: la falta de representación o el vacío político tiende a ser llenado por nuevas estructuras, y en su ascenso su construcción hegemónica se produce desplazando a sus competidores. Las vías o rutas de ese proceso dependen de las acciones políticas, las articulaciones y las relaciones de fuerza que logran construir. Pero en la reflexión de Gramsci, la construcción hegemónica es considerada un proceso inestable y demanda de acciones complejas que garanticen la dirección espiritual y moral de la sociedad, la ruptura del orden hegemónico que le precede y la participación activa de los subalternos (Gramsci, 1999). En este sentido, condieramos que la hegemonía que el gobierno de Rafael Correa ha construido demostró enormes debilidades: se apoyó más en las estructuras gubernamentales y estatales que en el desarrollo de bases sociales y políticas propias en los sectores subalternos. Además optó por apoyarse más en estrategias electorales que en la construcción de una sociedad organizada. Por último, se apoyó más en las estrategias de contención que en las de consenso; y sostuvo una alianza con el orden anterior antes que eliminarlo.

El gobierno de Lenin Moreno ha dado signos de intentar conversar con las organizaciones sociales. Siempre es posible volver a las organizaciones, pero el trabajo organizativo es un trabajo más lento y laborioso. Además necesitaría ceder espacios de participación a las organizaciones y atender sus demandas, e incluso abrir o compartir la dirección del Estado y sus recursos, algo que está aún por verse cuando finalizamos este ensayo (mediados de 2017). El gobierno de Rafael Correa con recursos y con mayoría absoluta no lo hizo. A la sombra de la crisis el gobierno tiene menos margen y siempre es más fácil la negociación clientelar, la construcción de filiaciones inestables o el impulso de organizaciones sin base social.

Pasar de las estrategias de contención a estrategias de consenso para la inclusión de los movimientos y organizaciones sociales es lo deseable, pero los movimientos sociales son estructuras variables con demandas que, si bien pueden negociarse como lo ha hecho, existe un núcleo que no se resuelven con un mejor reparto. Aunque los movimiento también viven sus contradicciones internas. Así, en el movimiento indígena-campesino persiste la demanda

²² La figura más notable fue la Carlos Pérez Guatambel, presidente de la Ecuarrunari, quien declaró “prefiero un banquero que una dictadura”, véase: *El Universo*, Quito, 22 de febrero 2017, en <https://goo.gl/8If69P>

tierra (reforma agraria) y agua (desprivatización); en el movimiento indígena y ecologista hay una oposición férrea al modelo extractivista; el movimiento de mujeres aun disputa el derecho aborto y los trabajadores el derecho a la sindicalización. Es un complejo de demandas que exigen romper con los privilegios de la hegemonía neoliberal precedente y las demandas del libre mercado con Europa que se barajan en el presente.

La presencia de la derecha en el escenario político aún debe estudiarse. Su intervención no ha sido homogénea, ensayando varias representaciones, y mostrando que sus posiciones tampoco son homogéneas. Sin embargo tienen más intereses en común que diferencias: mantener sus ejes de acumulación y reproducción económica. En la coyuntura reciente han mostrado que a pesar de las “concesiones” que el gobierno le hizo y a pesar de que los datos indican que fueron los sectores más beneficiados por el proceso, no se sienten seguros con el actual gobierno, tienen una enorme fortaleza política y buscan la dirección política del Estado. Frente a la crisis internacional, el control del Estado presenta para los grandes empresarios oportunidades de mejor y mayor acumulación e integración a las dinámicas globales del capitalismo.

Las organizaciones sociales han optado ocupar las calles como espacio de presión al Estado y demostración de articulación organizativa. Sin embargo, aunque tienen mucha vitalidad y capacidad de reacción, también fue claro que no tienen la fuerza para revertir la acción gubernamental. Aunque han logrado algunas alianzas y conquistas, ha perdido muchas más batallas frente al gobierno. Su estructura organizativa existente no da signos de renovar su estrategia y programa; la unidad en las calles y la suma de demandas fue una posición estratégica que les permitió acumular fuerzas, pero no lograron elaborar una propuesta que les permita re-articular los sentidos progresistas de la sociedad en la perspectiva de levantarse como una opción política electoral. En esas circunstancias, el *asedio* a los gobiernos de Rafael Correa configuró la política de los movimientos sociales y se convirtió en un horizonte práctico, carente de programa y de proyecto, y por tanto de alternativa. En apariencia, a los movimientos sociales les quedarían fuerzas para contener unas pocas reformas legales y disputar las calles, el problema de esto es que, no sabemos cuanta fuerza tengan para contener las intenciones de la derecha, que se muestra decidida a recuperar la dirección política del Estado y disputar la dirección moral en las calles.

Bibliografía

Aguinaga, Margarita (2009) “Balance del Foro Social Mundial Belem 2009 (Internacional)”, en *La Tendencia. Revista de Análisis Político. Programa anticrisis: Legitimidad y eficacia*. Quito: FES-ILDIS (no. 9, marzo-abril):

Gramsci, Antonio (1999). *Cuadernos de la Cárcel*. Vol. 5. Ediciones ERA-BUAP. México.

Herrera, Stalin, et al (2017). *Estudio sobre fortalecimiento y sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil en el Ecuador: entorno, capacidades y prácticas (Informe Final)*. Instituto de Estudios Ecuatorianos-Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito.

Latorre, Sara y Stalin Herrera (2013). “Gobernar para extraer, dinámica del conflicto en el gobierno de Rafael Correa”, en Herrera, Stalin, et al. *¿A quién le importa los Guayacanes?: Acumulación, gobierno y conflictos en el campo*. Instituto de Estudios ecuatorianos. Quito.

Modonesi, Massimo (2012). “Revoluciones pasivas en América Latina una aproximación gramsciana a la caracterización de los Gobiernos Progresistas de inicio del Siglo”, en Thwaites Rey, Mabel. *El estado en América Latina: Continuidades y rupturas*. ARCIS – CLACSO. Santiago de Chile.

Ospina, Pablo, Kaltmeier, Olaf y Büschges, Christian (edits.) (2009), *Los Andes en movimiento. Identidad y poder en el nuevo paisaje político*. UASB, Quito.

Santillana, Alejandra y Herrera, Stalin (2009). “Transformación y crisis del movimiento indígena ecuatoriano”, en Coscione, Marco. *América Latina desde abajo*. Ed. Abya Yala. Quito.

Unda, Mario (2015). “Análisis de Coyuntura 2015”, en *Espacio de Sociología de la UCE*, Quito.